

Boletín de Información Agraria y Pesquera de Estados Unidos y Canadá

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Embajada de España en Washington, D.C.

AMENAZA DE VETO A LA FARM BILL



CONTENIDO:

Amenaza de Veto a la Farm Bill 1

Nueva petición de Canadá de un panel contra los EE.UU. 3

Coincidiendo con el debate de la "Farm Bill" en el pleno del Senado esta semana, la Administración del Presidente Bush lanzó un ataque muy duro hacia los trabajos que está desarrollando el Congreso para conformar la legislación agraria para los próximos cinco años.

Los principales aspectos que han sido criticados tienen que ver con la forma en que se va a financiar esta Ley, así como con el mantenimiento, y en ocasiones el incremento de las ayudas que distorsionan el comercio mundial. La Oficina Presupuestaria del Presidente emitió una declaración oficial en este sentido el día 6 de noviembre.

Esta nota oficial vino precedida por unas declaraciones inusualmente duras del Secretario de Agricultura en funciones, Chuck Conner, acusando a los legisladores de esconder casi 22.000 millones de dólares de gasto con triquiñuelas de manejo presupuestario, y de financiar otros 15.000 millones con nuevos impuestos. Además, dijo que 7.000 millones de gasto en los mecanismos de sostenimiento de los precios de los cultivos, así como 3.000 millones de los seguros agrarios se estaban enmascarando con el truco de demorar su pago hasta

el ejercicio siguiente, de modo que los gastos de cada año se imputan al siguiente, y por consecuencia, los de 2012 al 2013, para que queden fuera de las perspectivas financieras de esta Ley y no se contabilicen, y calificó estas actuaciones como "simple y francamente deshonestas". Para criticar la creación de nuevos impuestos en diversos sectores para compensar los incrementos de gasto en la Farm Bill. Conner utilizó la frase probablemente más dura de todas, al decir que "No creemos que se deba pedir a otros sectores que paguen impuestos adicionales para financiar las ayudas agrarias, especialmente cuando la Ley actual sigue subvencionando a millonarios que viven en Park Avenue...", en referencia a la lujosa avenida de la ciudad de Nueva York.

En la declaración de la Oficina Presupuestaria del Presidente se critican en particular los siguientes aspectos de la Farm Bill:

- Las heterodoxas prácticas presupuestarias. El Congreso ha adoptado una disciplina para ayudar a reducir el elevado déficit público, según la cual cualquier iniciativa que comporte un incremento del gasto debe ser compensada por

VISITE NUESTRO SITIO
WEB EN
WWW.MAPUSA.ORG

Farm Bill (viene de pág 2)

reducción del gasto en otros ámbitos, o por una generación de ingresos que haga que esta iniciativa tenga al menos un efecto presupuestario neutro. Además, los republicanos se oponen sistemáticamente a cualquier medida que incremente la presión fiscal. Con las perspectivas presupuestarias actuales (las previsiones de gasto son muy bajas porque los precios de los cultivos son altos) esta Farm Bill se está redactando con muy escasos márgenes para financiar nuevas iniciativas de gasto, tales como las mejoras de los programas de conservación que persiguen algunos congresistas. En estas circunstancias, el Congreso ha recurrido a incrementar la fiscalidad en algunos sectores no agrarios y ha diferido pagos para reducir de forma artificiosa el gasto durante la vigencia de la Ley.

- El mantenimiento del sistema de sostenimiento de precios, e incluso el incremento de algunos precios mínimos, que hacen que las ayudas que distorsionan el comercio no sólo no se reduzcan sino que incluso se incrementen. Esto pone a los EEUU en una situación muy complicada de cara a las negociaciones de Doha. Estas y otras medidas incrementan el riesgo de denuncia ante los órganos de solución de diferencias de la OMC. Tal es el caso del "Average Crop Revenue",

que transforma los actuales pagos directos actualizando superficies, con lo que ya no podrían encajarse en la caja verde, o la negativa del Congreso a eliminar las restricciones al cultivo de frutas y hortalizas en las superficies de base, que expone a los pagos directos a ser atacados en la OMC.

- El mantenimiento, e incluso el incremento, de la protección a los sectores lácteo y azucarero. Se critica especialmente la obligación de la Administración de comprar todo el azúcar excedentario, con la restricción de que sólo puede vender a las plantas de bioetanol.
- La debilidad de las disposiciones relativas a la modulación de las ayudas, que permitirán que algunas explotaciones sigan recibiendo ayudas en importes escandalosos.

Esta declaración asegura que si la Ley se aprobase por el Congreso en su forma actual, los asesores del Presidente le recomendarían que ejerciese su derecho de veto. Es importante destacar el cuidado lenguaje en el sentido de que "recomendarán" al Presidente el veto, evitando prejuzgar cuál será la decisión final. Así, mientras está claro que la Administración está haciendo una apuesta clara por influir en el texto final de la Ley que finalmente saldrá del Congreso, no es fácil saber si la amenaza de veto es real o sólo es una forma de presionar a los legisladores. Probablemente ni los propios asesores del Presidente lo saben en estos momentos, y la decisión final dependerá de una multitud de factores políticos acerca de las relaciones entre el Presidente y un Congreso de mayoría demócrata, además del propio contenido de la Ley.

En caso de que finalmente el Presidente decidiese vetar la Ley, ésta sería devuelta al Congreso, que tendría la complicada tarea de reunir una mayoría de dos tercios para poder superar este veto. Esa misma semana, el



Farm Bill (viene de pág 2)

Congreso conseguía superar un veto presidencial en relación con una Ley referida a los recursos hídricos. Hasta transcurridos cinco años y medio de su gestión, George Bush no vetó ninguna Ley del Congreso. En la segunda parte de su segundo mandato ha ejercido el veto en cinco ocasiones: relacionadas con la dotación de fondos para la investigación con células madre, otro vinculado a los presupuestos de la guerra de Irak, un cuarto relacionado con la cobertura sanitaria a los niños, y éste último que ha sido superado por el Congreso. La última vez que los legisladores anularon un veto presidencial fue en noviembre de 1997, bajo el mandato de Bill Clinton, en relación con los presupuestos generales.

NUEVA PETICIÓN DE CANADÁ DE UN PANEL CONTRA LOS EEUU

El gobierno canadiense anunció que en la próxima reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC que tendrá lugar el 19 de noviembre, solicitará formalmente un panel contra los EEUU por las ayudas agrarias de los años 1999,

2000, 2001, 2002, 2004 y 2005. Canadá entiende que en estos años los EEUU superaron el techo de ayudas que distorsionan el comercio, que como consecuencia del resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay se sitúa en 19.900 millones de dólares para el año 1999, y en 19.100 millones para los años siguientes.

Esta petición es diferente de la que Canadá hizo el pasado 20 de junio, y sustituye a aquella, ya que en esta ocasión no incluyen en su demanda a los créditos garantizados a la exportación, asunto sobre el que ya se pronunció el OSD en su decisión por la apelación de Brasil al panel del algodón. Mantienen, por lo tanto, su demanda en relación con la supuesta superación por los EEUU del techo de ayudas autorizadas. De acuerdo con la posición canadiense, algunas de las ayudas que los EEUU otorgaron en estos años, y que no contabilizaron en su ayuda total autorizada, debieron incluirse y que de haberlo hecho, habrían superado su límite máximo. Hace poco más de un mes que los EEUU enviaron a la OMC su notificación de las ayudas agrarias de los años 2002 al 2005, en un paso claramente dirigido a confrontar esta demanda canadiense.

Brasil ha hecho también una petición en el mismo sentido, y es de esperar que ambos paneles se fundan en uno solo. Canadá comenzó este proceso el 7 de febrero de 2007, al solicitar el establecimiento de las consultas previas preceptivas entre las partes antes de plantear formalmente el panel. En aquella ocasión, hasta otros ocho miembros de la OMC, entre los que se encontraban Brasil y la Unión Europea, se unieron a Canadá en el proceso. El 20 de junio Canadá había hecho la primera petición formal de un panel, que fue bloqueada por los EEUU. Los principales argumentos que Canadá está utilizando consisten en disputar la legalidad de incluir los pagos directos en la caja verde, al considerar que no están totalmente desvinculados de la producción porque no dejan libertad total al agricultor. También disputan la práctica de excluir del cómputo de ayuda a los pagos contracíclicos, acogiéndose a la excepción "de mínimos".

PUBLICADO POR LA

**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN**

EMBAJADA DE ESPAÑA EN WASHINGTON, D.C.

2375 Pennsylvania Ave., NW

Washington, D.C. 20037

Teléfono: (1) 202-728 2339

Fax: (1) 202-728 2320

Correo electrónico:

info@mapausa.org